

# REPÚBLICA DE COLOMBIA



## SALA DE DECISIÓN LABORAL

### AUDIENCIA DE TRÁMITE Y FALLO

El treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN se constituyó en audiencia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **JOSÉ ORLANDO CORREA BOTERO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-013-2017-00610-01, venido a esta Instancia en apelación de la sentencia de primer grado en favor de COLPENSIONES.

### AUTO

Se observa a folio 120, escrito mediante el cual, el abogado ANDRÉS EDUARDO SALCEDO CAMACHO, portador de la T.P. 262.589 del Consejo Superior de la Judicatura, invocando su calidad de representante legal de la firma de abogados ABACO ABOGADOS Y CONSULTORES S.A.S. presenta poder para actuar en este proceso y sustitución de este a favor de la abogada MANUELA ANDREA LÓPEZ HENAO portadora de la T.P. 253.225 del Consejo Superior de la Judicatura

Revisado el expediente, se halla copia de la escritura pública No. 003378 del 2 de septiembre de 2019, a través de la cual COLPENSIONES. le confiere poder especial a la referida firma de abogados para actuar como apoderada judicial en procesos judiciales en su contra.

En atención a lo anterior, se le confiere personería como apoderada principal ABACO ABOGADOS Y CONSULTORES S.A.S. y a la DR. MANUELA ANDREA LÓPEZ HENAO, como apoderada sustituta.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

## 1. ANTECEDENTES

A través del ejercicio de la presente acción ordinaria laboral, el demandante pretende el reconocimiento y pago de pensión de vejez compartida, intereses moratorios del artículo 141 de las Ley 100 de 1993 o subsidiariamente la indexación.

**Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, relata el actor** que nació el 10 de junio de 1951 y al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 tenía más de 40 años lo que lo hace beneficiario del régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Que cuenta con más de 1400 semanas cotizadas y que solicitó el 14 de marzo de 2017 la pensión compartida.

Señala que en cumplimiento de la sentencia emitida por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Medellín se le reconoció pensión de jubilación por los servicios prestados como trabajador oficial del Hospital General de Medellín con fundamento en la Ley 33 de 1985 para que fuera pagada por el Instituto de seguros sociales (en adelante ISS) mediante la resolución 030314 de 24 de noviembre de 2009.

Afirma que se encuentra afiliado a COLPENSIONES desde el 13 de julio de 1979 para el riesgo de vejez, pero no la jubilación pues esa pensión estaba cubierta por el empleador público al cual prestó los servicios personales.

## 2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La oficina judicial de la primera instancia despachó de manera desfavorable las pretensiones de la demandada.

Para absolver la *a quo* adujo que según lo acreditado, el demandante adelantó un proceso ante el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Medellín en contra del ISS y el Hospital General de Medellín y en sentencia de 23 de abril de 2008 se condenó al ISS a pagar la pensión de jubilación bajo las prerrogativas de la Ley 33 de 1985 a partir de 2 de mayo de 2007 tomando exclusivamente los tiempos servidos por el demandante al Hospital general de Medellín como empleador público.

Que, luego el demandante presentó una demanda de reliquidación de pensión vejez para que se tuvieran en cuenta los tiempos simultáneos laborados en el Hospital General de Medellín y en Profamilia, proceso que se tramitó ante el juzgado 14 laboral del Circuito de Medellín, emitiéndose sentencia el 31 de enero de 2014 negando las pretensiones.

En el anterior proceso se consideró que la prestación económica del demandante había sido definida en el juzgado 16 y que allí debió definirse la forma de liquidación.

En la sentencia del juzgado 16 reflexionó que el demandante era beneficiario del régimen de transición y desestima cualquier responsabilidad del Hospital General de Medellín por haber efectuado este empleador siempre cotizaciones la ISS subrogando totalmente el riesgo.

Indicó la juez en el presente proceso, que la pensión de vejez compartida es la que se presenta cuando el empleador reconoce una pensión de jubilación y posteriormente debe ser asumida por Colpensiones obligados el empleador a continuar cotizando hasta que el trabajador cumpla los requisitos de una pensión del sistema, quedando a cargo del empleador el mayor valor de la pensión, ello conforme al Decreto 2879 de 1975 aprobatorio del acuerdo 29 modificado por el artículo 18 del Decreto 758 de 1990.

Indicó que en este caso la pensión reconocida al actor no tiene la naturaleza de ser una pensión de jubilación reconocida por el empleador sino como una pensión de carácter legal a cargo del entonces ISS conforme a la ley 33 de 1995, prestación del sistema conforme al artículo 36 de la ley 100 de 1993.

### **3. DEL RECURSO DE APELACIÓN**

El apoderado del demandante apela la sentencia señalando que el despacho cambio el contenido de la sentencia del juzgado 16 laboral del Circuito y cambió la naturaleza del proceso que se inició en ese despacho. señala que no hubo ningún error en la pensión reconocida al actor, la equivocación fue imponer al Seguro Social una pensión de carácter legal que estaba en cabeza del Hospital General de Medellín y en ese momento no la recurrió porque no había sustento para recurrir una sentencia que no era contra de los intereses de su representado.

Alega que lo que hizo el juzgado 16 fue imponer la obligación al Seguro Social al haberse integrado al contradictorio en ese proceso, pero la demanda solo se había instaurado en contra del Hospital General y nunca en el transcurso del proceso se cambió la pretensión. Que en esa época no se cumplían requisitos para la pensión en el régimen de prima media por eso no se demandó al seguro social. Y lo que se pretendió fue una pensión en el sector público por tener 55 años y 20 años de servicio, lo que no servía para pedir una pensión de vejez y se dejó para pedir la pensión cuando el demandante cumpliera 60 años de edad.

Que, la pensión que le fue reconocida al demandante en parte alguna fue una pensión de vejez fue una de jubilación por cumplir requisitos de trabajo en una entidad pública de conformidad con el artículo 1 de la ley 33 de 1985.

Adujo que el hecho de que el demandante haya pedido un incremento de la pensión por cotizaciones simultaneas tampoco desnaturaliza el reconocimiento de la pensión de jubilación inicial. Esa pensión debía haber sido recurrida por la persona que representaba los intereses del ISS para que le fuera impuesta al Hospital General de Medellín como empleador público, pero el despacho nombró un diputado para el pago de una pensión pública y no lo debió hacer, cuando la afiliación que se hizo en ese momento no subrogaba la pensión solo estaban habiendo esas cotizaciones para que en su momento, cuando el demandante cumpliera los requisitos de la pensión de vejez, accedería a ella, pero que sí se subrogó el empleador en Colpensiones para que le reconozca la pensión de vejez.

Por lo anterior, solicita se revoque a sentencia y se acceda a las pretensiones, ello es a la pensión compartida de vejez.

#### **4. DE LAS ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA:**

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, el apoderado judicial del DEMANDANTE, y COLPENSIONES, presentaron oportunamente escrito de alegación, en los siguientes términos:

#### **ALEGATOS DEL DEMANDANTE.**

El apoderad del actor expone en los alegatos que el argumento y fundamento principal del Juzgado del conocimiento para proferir la absolución para la entidad demandada por las pretensiones introducidas en la demanda, fue el hecho de haber considerado que la pensión que judicialmente le fue reconocida a mi mandante, fue la de vejez por cuenta del Seguro Social, hoy Colpensiones, al manifestar la señora Juez, que de tal manera interpretaba el fallo proferido en su momento por el Juzgado 16 Laboral del Circuito el día 23 de abril del año 2008.

Con esa manifestación de interpretar un fallo que tiene el sello de la cosa juzgada, se abrogó la competencia que en su momento tuvo la jurisdicción laboral en Sala de Decisión Laboral y modificó una decisión en firme proferida luego de la terminación de un proceso ordinario, cuando la sentencia rememorada fue clara en sus

consideraciones y parte resolutive, cuando claramente determinó que la pensión reconocida a mi acudido judicial, era una pensión de jubilación regulada por el artículo primero de la ley 33 de 1985, prevista para los servidores públicos que laboraron por más de veinte años de servicio en el sector oficial y tener cincuenta y cinco o más años de edad. El error del Juzgado, en mi concepto, fue habérsela impuesto al Instituto de los Seguros Sociales y no al empleador, el Hospital General de Medellín, y eso en mi parecer, originó la confusión del Juzgado del Conocimiento al definir este proceso, puesto que todo indica que la premisa que tuvo el despacho de instancia, era que el Seguro Social no pagaba pensiones de jubilación del sector público, y así llegó a la conclusión equivocada, que entonces la que se le impuso era una pensión de vejez, conclusión que sea cae por su propio peso, porque es claro que en el reglamento del Seguro Social no habían reguladas pensiones de vejez para los hombres que laboraron en el sector público y que hubieran trabajado 20 años de servicio y tuvieran por lo menos 55 años de edad, cuando el seguro exige en su normatividad que se tiene derecho a la pensión de vejez con un mínimo de 1000 semanas cotizadas para los hombres que hubieran tenido 60 años de edad, derecho que no fue alegado ni debatido en esa causa, tal como lo entendió y decidió el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Medellín y en su momento el Honorable Tribunal Superior de Medellín, pero le impuso el pago de dicha pensión al Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

El pensionado Correa Botero siempre sostuvo que la pensión a la que aspiraba por cuenta del Hospital General de Medellín era la consagrada en la Ley 33 de 1985, por haber laborado al servicio de dicha entidad por más de veinte años de servicio y contar con cincuenta y cinco (55) años de edad. Como no le fue concedida, hubo de presentar la demanda, con el siguiente fundamento fáctico:

*“SEXTO: El artículo primero de la Ley 33 de 1985, aplicable a mi mandante, tiene previsto el derecho a una pensión de jubilación con veinte años de servicios y cincuenta y cinco años de edad, equivalente al 75% del promedio de los salarios y primas de toda clase del último año de servicios (art. 73 D. 1848 de 1969).”*

En la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, con acogimiento de dicha pretensión, mediante sentencia del 23 de abril de 2008, dijo lo siguiente en sus consideraciones principales:

“Por lo expuesto entro de la presente Ley 100 de 1993, nos debemos remitir a la Ley 33 de 1985, que consagra los requisitos para adquirir el derecho a la pensión de vejez. El artículo 1º de la Ley 33 de 1985, preceptúa: “Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servicio veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de

cincuenta y cinco (55) años tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios”

“El tiempo certificado y laborado por el demandante no fue objetado por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por lo cual se observa que se cumple con el requisito de contar con más de veinte años de servicio, además de la edad de 55 años, tal y como lo estipula el artículo 1º de la Ley 33 de 1985”.

La apoderada que defendió los intereses del ISS en el proceso que se surtió ante el Juzgado 16 Laboral, no mostró inconformidad con dicha determinación y así cobró firmeza la decisión, y por estas razones hoy Colpensiones está pagando una pensión patronal que no le corresponde, pero no por tal circunstancia, deja de ser una pensión que debe ser compartida de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto 049 de 1990, previo el reconocimiento de la pensión de vejez con fundamento en las normas que la regulan, por transición pensional, en el régimen del Seguro Social, esto es, con aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 del mismo año.

Dentro de los reglamentos del Seguro Social, no se encuentra norma alguna que disponga que dicho organismo podía subrogar al empleador en el reconocimiento y pago de una pensión prevista en la Ley 33 de 1985, esa subrogación se daba con el pago de la pensión de vejez cuando el afiliado cumpliera con los requisitos de la pensión de vejez, y por eso precisamente se reclama ahora en esta actuación, pero lo sentenció así el Juzgado del conocimiento, pero no por tal, deja de ser una pensión legal.

Por lo dicho, muy respetuosamente le solicito, **REVOCAR** la sentencia recurrida, para que en su lugar, se **CONDENE** a COLPENSIONES a reconocer a mi representado JOSÉ ORLANDO CORREA BOTERO la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, por haber cumplido sesenta años de edad y tener más de 1.300 semanas cotizadas, en aplicación de la transición pensional prevista en la Ley 100 de 1993, lo que se hará a partir del momento en que cumplió mi mandante los sesenta años de edad el día 10 de junio de 2011.

**ALEGATOS DE COLPENSIONES.**

La apoderada de COLPENSIONES argumenta resumidamente que la pensión de carácter compartida que pretende el demandante con la Ley 33 de 1985 no es procedente en consideración que el artículo 18 del decreto 758 de 1990 señaló:

“ARTÍCULO 18. COMPARTIBILIDAD DE LAS PENSIONES EXTRALEGALES. Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado.”

Dicho lo anterior, es claro indicar que para que se dé el fenómeno de la compatibilidad y/o compatibilidad el empleador, Hospital General de Medellín, debió en su momento reconocer la pensión de jubilación cosa que no sucedió en el caso en estudio ya que la entidad en mención negó la prestación al demandante, por lo que siguiendo los parámetros normativos en mención es necesario el reconocimiento de la prestación por parte de la Entidad empleadora.

Aunado a lo anterior, vale resaltar que al demandante se le reconoció una prestación a través de la Resolución No. 30314 del 24 de noviembre de 2009, en cuantía de \$2,870,589.00, efectiva a partir del 1 de mayo de 2007, en cumplimiento de un fallo de tutela y una sentencia Ordinaria Laboral proferida por el JUZGADO DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, dentro del proceso No. 2007 – 00265-00, por lo que es necesario traer a colación el artículo 1° de la Constitución Política señaló:

“ARTÍCULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”

Adicionalmente la sentencia T-554 de 1992 de la Corte Constitucional, señaló: “(...) Por razones de principio, una entidad pública está en el deber constitucional y legal de ejecutar las sentencias en firme (C.C.A. art. 176).

La misión de los jueces de administrar justicia mediante sentencias con carácter obligatorio exige de los entes ejecutivos una conducta de estricta diligencia en el

cumplimiento de estas, con el fin de mantener vigente el Estado de Derecho, actuar en concordancia con sus fines esenciales e inculcar en la población una conciencia institucional de respeto y sujeción al ordenamiento jurídico.

La legitimidad de cualquier Estado se vería resquebrajada si los mismos órganos del poder público, ya por su inactividad ora por su indolencia, estimulan el desacato de las decisiones de los jueces y la práctica de hacer caso omiso del imperativo constitucional de colaborar armónicamente para la realización de los fines del Estado (CP art. 113).

Así las cosas, el artículo 304 del código de procedimiento Civil señala de forma expresa que: “La parte resolutive se proferirá bajo la fórmula "administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley"; deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir, con arreglo a lo dispuesto en este Código”, en virtud del principio de congruencia.

Ahora bien, como se evidenció en el estudio realizado en la Resolución GNR 245441 del 19 de agosto de 2016, que mediante Resolución No. 30314 del 24 de noviembre de 2009, el ISS dio cumplimiento a un fallo judicial proferido por el JUZGADO DIECISEIS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el cual le ordena al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES lo siguiente:

“(…) PRIMERO: Se ABSUELVE a la ESE HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, de todas las pretensiones solicitadas en su contra por el demandante JOSÉ ORLANDO CORREA BOTERO, conforme a lo manifestado en la parte motiva de esta sentencia; SEGUNDO: SE DECLARA que al señor JOSÉ ORLANDO CORREA BOTERO, identificado con la cédula 8'317.953 de Medellín, le asiste el derecho a que le sea reconocida la PENSION VITALICIA DE JUBILACION, a partir del 2 de mayo de 2007. TERCERO: Se CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, representada legalmente por la doctora NORELLA BELLA DIAZ AGUDELO o por quien haga sus veces, a reconocer y pagar a favor del señor JOSÉ ORLANDO CORREA BOTERO identificado con la cédula 8317.953 ,de Medellín, la suma de CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$40'745.914,38), por concepto de mesadas pensionales atrasadas de la Pensión VITALICIA DE JUBILACION, derecho que se concederá a partir del día siguiente en que se retiró del servicio, es decir) desde el 2 de mayo de 2007; CUARTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a pagarle al señor JOSÉ ORLANDO CORREA BOTERO, sobre el valor de las



mesadas retroactivas reconocidas, a tasa máxima de interés moratorio vigente hasta el momento en que se realice efectivamente el pago; QUINTO: Condenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIAL para que siga reconociendo al actor JOSÉ ORLANDO CORREA BOTERO, a partir del mes de MAYO del año 2008, la mesada pensional de jubilación equivalente a DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$2'810.589,61), en forma vitalicia, incluyendo las mesadas de junio y diciembre y sin perjuicio de los incrementos legales.....(...)"

De conformidad con lo anterior, es válido precisar que el ISS, Mediante Resolución No. 30314 del 24 de noviembre de 2009, dio estricto cumplimiento al fallo judicial, proferido por el JUZGADO DIECISEIS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, que ordenó a la Administradora reconocer una pensión de jubilación, a favor al demandante por valor de 2'810.589,61, y un retroactivo por valor de \$4.745.914,38, motivo por el cual no es procedente el reconocimiento de la pensión de vejez de carácter compartida como lo solicita el demandante, toda vez que ya se le reconoció una prestación, acatando una providencia judicial ejecutoriada la cual no hace referencia a los intereses solicitados, por lo que hace tránsito a cosa juzgada, razón por la cual no es procedente acceder a las pretensiones de la demanda, de allí que la sentencia de segunda instancia deberá ser absolutoria.

## **5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER:**

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer, si le asiste derecho al actor al reconocimiento de una pensión de vejez de carácter compartida a cargo de COLPENSIONES, con los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993.

Tramitado el proceso en legal forma, y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

## **6. CONSIDERACIONES:**

Se conocerá el caso en virtud del recurso de apelación de la parte demandante, atendiendo el principio de consonancia que establece el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 en virtud del cual las decisiones de segunda instancia se circunscriben exclusivamente a los puntos objeto de recurso.

Respecto del derecho a la pensión pretendida por el actor, sea lo primero precisar que en el caso sub examine, se encuentra plenamente acreditado y no es objeto de debate, que a la fecha de presentación de la demanda el actor estaba percibiendo de COLPENSIONES pensión otorgada mediante Resolución 030314 de 24 de noviembre de 2009 (fls 16 a 18) la que se emitió dando cumplimiento a la sentencia dictada por el Juzgado 16 laboral del Circuito de Medellín que condenó al entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, al pago de pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, como beneficiario del régimen de transición pensional.

Así las cosas, se hace necesario estudiar si el actor, a pesar de disfrutar de la mencionada pensión tiene derecho a la pensión ordinaria de vejez con base en el Decreto 758 de 1990 como pensión compartida con la de jubilación.

Respecto a la compatibilidad de las pensiones, el artículo 18 del Decreto 758 de 1990, establece que los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto hoy Colpensiones, procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado.

De acuerdo con lo anterior, debe manifestar la Sala, que contrario a lo manifestado por el recurrente, la pensión de jubilación que le fue otorgada al demandante por parte del entonces ISS a través de la Resolución 030314 de 24 de noviembre de 2009, NO tiene el carácter de una pensión que pueda ser compartida con otra pensión de vejez a cargo también del ISS hoy COLPENSIONES, pues no fue reconocida por el empleador del demandante, para la época HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, de una parte porque, al analizar el cuerpo de la mencionada resolución se determina, como bien lo adujo la *a quo*, se atoró en cumplimiento de una sentencia judicial emitida por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Medellín el 23 de abril de 2008 (fl. 138 cuaderno 2) en el proceso con radicado 05001310501622070026500, en el que se condenó al ISS al pago de la prestación pensional de jubilación establecida en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 como beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y determinándose expresamente en la sentencia, que la pensión no estaba a cargo del empleador del actor el HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN sino del ISS por haber sido

afiliado por su empleador al ISS, decisión que no fue recurrida por el accionante, sin que pueda en este proceso válidamente efectuar glosa a una sentencia que quedó ejecutoriada y por ello hace tránsito a cosa juzgada.

Ahora aduce el recurrente, que no podía apelar la decisión porque no era adversa a sus intereses, y que a pesar de ello debe tenerse como una pensión de jubilación y no de vejez pues así fue condenada y se reconoció por tiempos de servicio público prestado, además que en ese proceso adelantado ante el juzgado 16 no demandó al ISS.

Al respecto debe precisarse que no es cierto que esa demanda se haya insaturado únicamente en contra del Hospital General de Medellín, pues como se ve a folios 32 del cuaderno 2 se demandó en esa oportunidad también al ISS y frente a esta entidad se pretendió el pago de la pensión. Y en todo caso la forma de vinculación del ISS en ese proceso no tiene incidencia alguna en la decisión que se tome en este pues lo que importa es que el juez 16 Laboral del Circuito de Medellín determinó que el empleador del actor, HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, lo había afiliado al régimen de prima media administrado en la época por el ISS, por lo que se había subrogado en el riesgo de vejez y por lo tanto, era el ISS el llamado a pagar la referida prestación, como en efecto condenó, decisión que resulta ahora inmutable.

En otras palabras, ahora no es posible considerar que la pensión del actor debía reconocerla el empleador del actor HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN como de jubilación con la vocación de ser compartida, hipótesis que ya no es dable en razón de que en la sentencia mencionada el Hospital fue absuelto de esa pretensión de pensión de jubilación, con efectos de cosa juzgada.

Pero es más, si el actor en el proceso que tramitó ante el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Medellín, estaba en desacuerdo que la pensión de jubilación que se le otorgó judicialmente con base en la ley 33 de 1985 estaba a cargo del ISS por considerar que era a cargo de su empleador el HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, la que luego podría ser compartida con al que le reconociera el ISS, tenía plena legitimación para recurrir en apelación la decisión el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Medellín, sin embargo no apeló la sentencia y por ello no puede ahora efectuar reproches a lo decidido en esa oportunidad.

Es de precisar que contrario a lo dicho por el recurrente, aunque la pensión que disfrutó el actor fue reconocida teniéndose en cuenta solo tiempos de servicio público, ello no

quiere decir que no se trate de una prestación del sistema de seguridad social de la Ley 100 de 1993, pues en efecto la pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985 se le reconoció por el juez, como beneficiario del artículo 36 de la Ley 100 que permitió la aplicación ultractiva de los requisitos de edad, tiempo y monto de un régimen anterior que le era aplicable al actor, pero es claro que los demás elementos de la prestación corresponden a los de la ley 100 de 1993, que no tiene dentro de las prestaciones que otorga la pensión de jubilación sino la de vejez. Es así como las pensiones del régimen de transición hacen parte del sistema General de Seguridad Social en pensiones, por lo tanto, a sus beneficiarios se les aplica los preceptos normativos del sistema.

Así lo ha explicado la Corte Suprema de justicia, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL1981-2020, indicó:

*“De esta forma, el régimen de transición no es un mundo separado o excluido de la Ley 100 de 1993, es una regulación especial englobada en la misma, a través del cual se otorga a ciertas personas la posibilidad de pensionarse con base en la edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto de la ley anterior, quedando todo lo demás sometido al imperio de aquella normativa.”*

En atención a las consideraciones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, se concluye que ningún derecho le asiste al demandante a una pensión de vejez a cargo del ISS, pues el riesgo de vejez amparado por el Sistema General de Pensiones ya se encuentra cubierto con el reconocimiento de una prestación económica propia del sistema como lo es, la pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985 como beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que la sentencia apelada debe ser confirmada.

COSTAS en esta instancia a cargo del demandante por resultar vencido en el recurso de apelación.

Las agencias en derecho conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$908.526.

## **7. DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** **CONFIRMAR** la sentencia del 5 de junio de 2019, proferida por el JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el presente proceso, promovido por el señor **JOSÉ ORLANDO CORREA BOTERO**, contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES**.

**SEGUNDO:** COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandante. Las agencias en derecho se estiman en la suma de \$908.526.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

La anterior sentencia se notifica a las partes en ESTADOS.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma el acta por quienes intervinieron en la decisión, los magistrados,

**FRANCISCO ARANGO TORRES**

**JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ**

**JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -  
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados  
N ° **114** del **01 DE JULIO DE 2021**.

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

**FRANCISCO ARANGO TORRES**  
**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **64b0cce55d79a79c7421084b076c8a534d2e2ba122d6a3c051d508ea3805d735**

Documento generado en 30/06/2021 10:34:44 AM